

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEQROO/POS/011/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA SX-JE-116/2022, DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL.

ANTECEDENTES

- I. **PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE QUEJA.** El nueve de junio del año dos mil veintidós¹, se recibió en la Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo², el escrito de queja signado por el ciudadano Víctor Venamir Vivas Vivas, en su carácter de Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo³, mediante el cual denuncia a la ciudadana Claudia Carrillo Gasca, en su calidad de Magistrada del propio tribunal, por la presunta emisión de comentarios y posicionamientos que a dicho del denunciante, configuran violencia política en su contra, así como calumnia en materia electoral, durante la sesión pública de Pleno de referido órgano jurisdiccional, en fecha siete de junio del presente año. Conductas que a su dicho, le causan un perjuicio a su persona y a su investidura como juzgador electoral y resultan violatorias de sus derechos fundamentales de inocencia por cosa juzgada, presunción de inocencia, así como de su derecho de respeto irrestricto a la honra y la dignidad humana. Además, que también a su criterio, son configurativos de violación a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y probidad que deben regir el desempeño de la denunciada como Magistrada Electoral.
- II. **CONSTANCIA DE REGISTRO.** En virtud de lo anterior, el diez de junio, la Dirección registró la queja de referencia y formó el Cuaderno de Antecedentes IEQROO/CA-019/2022, ordenando lo siguiente:
 - A) Derivado de que del escrito de queja se desprendió que las presuntas conductas denunciadas, fueron realizadas en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso c), Apartado 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁴; 105, párrafo 2, de la

¹ En adelante todas las fechas referidas corresponderán al año dos mil veintidós salvo cita en contrario.

² En adelante Dirección.

³ En adelante TEQROO.

⁴ En adelante Constitución General.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales⁵; 418, fracción IV de la Ley de Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo⁶; 13, 68, fracción II, inciso e), 143 y 145 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto⁷. Así, como en observancia a la Tesis XXXVIII/2016, de rubro ***"COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA CONDUCTA DE LOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL, CORRESPONDE A LA CÁMARA DE SENADORES"***, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación⁸, y a efecto de salvaguardar los principios de imparcialidad, independencia y autonomía que rigen la función judicial; consideró que los hechos denunciados no actualizan asunto de competencia del Instituto Electoral de Quintana Roo⁹, por lo que declaró la incompetencia para conocer del mismo.

- B) De conformidad a lo señalado en el punto anterior, en observancia a la Tesis XXXVIII/2016, de rubro ***"COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA CONDUCTA DE LOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL, CORRESPONDE A LA CÁMARA DE SENADORES"***, emitida por la Sala Superior, en la cual se señala que de la interpretación de los artículos 116, fracción IV, inciso c), Apartado 5, de la Constitución General; 105, párrafo 2, de la Ley General, se desprende que la designación de los magistrados de los tribunales electorales locales se realiza por la Cámara de Senadores y en tales disposiciones no se estableció un sistema para la imposición de sanciones, por conductas cometidas en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral. Por ello, determinó que compete a dicho órgano legislativo conocer de la conducta de los magistrados electorales locales, cuando incurran en el ejercicio indebido de la función jurisdiccional, por lo que ordenó dar vista a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, remitiendo el escrito de queja original y resguardando una copia certificada del mismo para archivo de esta autoridad, para los efectos legales correspondientes.
- C) De conformidad con lo establecido en los artículos 44, 52 y 146 del Reglamento, ordenó notificar al ciudadano Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado del IEQROO.
- D) Asimismo, ordenó el cierre del Cuaderno de Antecedentes correspondiente.

⁵ En adelante Ley General.

⁶ En adelante Ley Local.

⁷ En adelante Reglamento.

⁸ En adelante Sala Superior.

⁹ En adelante Instituto.

- III. PRESENTACIÓN DE JUICIO ELECTORAL.** El diecisiete de junio, inconforme con lo anterior, el denunciante, presentó demanda de juicio electoral, cuyo expediente fue remitido a la Sala Superior.
- IV. ACUERDO SUP-JE-203/2022.** El treinta de junio, la Sala Superior, mediante acuerdo SUP-JE-203/2022, determinó que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral¹⁰, es la competente para conocer y resolver la controversia respectiva.
- V. SENTENCIA SX-JE-116/2022.** El catorce de julio, la Sala Regional, mediante Sentencia radicada en el expediente SX-JE-116/2022, determinó revocar el Acuerdo mediante el cual, la Dirección declaró la incompetencia para conocer el asunto, señalando los efectos siguientes:
- A) Revocar el actor impugnado; [sic]*
- B) Ordenar que el escrito de queja se tramite como procedimiento ordinario sancionar a fin de que el IEQROO se pronuncie de manera colegiada sobre la competencia para conocer de los hechos denunciados;*
- C) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que emita la determinación correspondiente, informe dicha actuación a esta Sala Regional, para lo cual deberá anexar las constancias que así lo acrediten y las relativas a la notificación de la resolución practicada al actor.*
- VI. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA SX-JE-116/2022.** El diecinueve de julio, el Instituto mediante oficio fue notificado de la Sentencia de la Sala Regional, radicada en el expediente SX-JE-116/2022.
- VII. REGISTRO DEL EXPEDIENTE IEQROO/POS/011/2022.** El diecinueve de julio, la Dirección en cumplimiento a la Sentencia de la Sala Regional referida en el antecedente anterior, registró el escrito de queja de mérito, bajo el número de expediente IEQROO/POS/011/2022, ordenando en la constancia de registro respectiva, lo siguiente:

¹⁰ En adelante Sala Regional.

- A) Toda vez que advirtió que se actualiza el supuesto previsto en la causal de improcedencia establecida en el artículo 418, fracción IV de la Ley Local; con fundamento en el artículo 417 y 420 de la propia Ley Local, ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, para ser presentado en su oportunidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 423 de citada Ley, a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto¹¹, para los efectos conducentes.
- B) Con fundamento en el artículo 17, inciso a) del Reglamento, ordenó dar aviso del registro del presente asunto a las integrantes de la Comisión.
- VIII. REMISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN.** El veintiuno de julio, la Dirección, mediante oficio DJ/1934/2022, remitió el proyecto de Resolución a la Consejera Presidenta de la Comisión, con el propósito de que el mismo fuera presentado a la propia Comisión, conforme a las disposiciones aplicables.
- IX. CONVOCATORIA A SESIÓN DE LA COMISIÓN.** El veintidós de julio, la Presidenta de la Comisión, convocó a Sesión Ordinaria de la Comisión a las y el integrante de la misma, para celebrarse en fecha veintiocho de julio.
- X. RECEPCIÓN DE ESCRITO SIGNADO POR EL QUEJOSO.** El veinticinco de julio, se recibió en la Dirección, un escrito signado por el ciudadano Víctor Venamir Vivas Vivas, quejoso del expediente de mérito, mismo que denominó como presentación de alegatos.
- XI. SESIÓN DE LA COMISIÓN.** El veintiocho de julio, se llevó a cabo la sesión de la Comisión, en la que se determinó por unanimidad, el reenvió del proyecto de Resolución a la Dirección para atender en la parte considerativa las alegaciones realizadas por el ciudadano quejoso, en el escrito referido en el antecedente anterior, a efecto de garantizar el debido proceso y el principio de exhaustividad con el fin de que en su oportunidad, conforme a la normatividad aplicable, fuera nuevamente turnado a la Comisión.
- XII. REMISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN.** El veintidós de agosto, la Dirección, mediante oficio DJ/2082/2022, remitió nuevamente el proyecto de Resolución a la Consejera Presidenta de la Comisión, con el propósito de que el mismo fuera presentado a la propia Comisión, conforme a las disposiciones aplicables.

¹¹ En adelante Comisión.

- XIII. CONVOCATORIA A SESIÓN DE LA COMISIÓN.** El veintitrés de agosto, la Presidenta de la Comisión, convocó a Sesión Ordinaria de la Comisión a las y el integrante de la misma, para celebrarse en fecha veintinueve de agosto.
- XIV. SESIÓN DE LA COMISIÓN.** El veintinueve de agosto, se llevó a cabo la sesión de la Comisión, en la que se determinó su aprobación por unanimidad. En tal sentido, el mismo día, mediante oficio CQyD/243/2022, la Consejera Presidenta de la Comisión, remitió el Proyecto de Resolución en términos de las disposiciones legales aplicables a la Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto, para que se presentara en dicho órgano superior, para su estudio y votación correspondiente.
- XV. PRESENTACIÓN DE EXCUSA DE LA CONSEJERA ELECTORAL ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA.** El veinte de septiembre, mediante oficio CE/EAG/043/2022, la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, excusarse de conocer y votar el proyecto de la presente Resolución, bajo el fundamento y motivación referidos en el mismo.
- XVI. APROBACIÓN DE EXCUSA DE LA CONSEJERA ELECTORAL ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA, POR PARTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO.** El veintidós de septiembre, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto, fue aprobada por unanimidad de votos, la excusa presentada por la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, a la Secretaría Ejecutiva, a través del oficio CE/EAG/043/2022.

CONSIDERACIONES DE COMPETENCIA

- I. COMPETENCIA PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR.** Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 1 de la Constitución General, en relación con los artículos 98, numerales 1 y 2, y 104 de la Ley General, en correlación con el artículo 49, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo¹², los artículos 120, 123, 125, 137, fracción XIII, 140, 141, 157 fracción IX, 292, 423 último párrafo y 424 de la Ley Local, así como en el precepto 81 del Reglamento, el Consejo General de este Instituto es competente para emitir la presente Resolución.
- II. FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR.** Que el artículo 410 de la Ley local, dispone que el procedimiento ordinario sancionador se sustanciará para el conocimiento de las faltas, y aplicación de sanciones por las infracciones a que se refiere la propia Ley local, asimismo establece que los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento ordinario sancionador son el Consejo General, la Comisión y la Dirección. Además, el artículo 417 de la Ley local,

¹² En lo subsecuente Constitución local.

señala que la Dirección procederá al análisis del escrito de queja presentado, para determinar la admisión o desechamiento del mismo, en su caso, y de igual forma el artículo 422 de la Ley local, establece que la investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

III. HECHOS DENUNCIADOS. Del escrito de queja presentado por el ciudadano Víctor Venamir Vivas Vivas, en su carácter de Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se desprende que denuncia a la ciudadana Claudia Carrillo Gasca, en su calidad de Magistrada del propio tribunal, por la presunta emisión de comentarios y posicionamientos que a dicho del denunciante, configuran violencia política en su contra, así como calumnia en materia electoral, hechos que se desarrollaran durante la sesión pública de Pleno de referido órgano jurisdiccional, de fecha siete de junio del presente año. Conductas que a su dicho, le causan un perjuicio a su persona y a su investidura como juzgador electoral y resultan violatorias de sus derechos fundamentales de inocencia por cosa juzgada, presunción de inocencia, así como de su derecho de respeto irrestricto a la honra y la dignidad humana. Además, que también a su criterio, son configurativos de violación a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y probidad que deben regir el desempeño de la denunciada como Magistrada Electoral.

IV. ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS. El veinticinco de julio, se recibió en la Dirección, un escrito signado por el ciudadano quejoso, mismo que denominó como presentación de alegatos, en el cual entre otros aspectos, solicitó que la Dirección, como órgano encargado de la redacción del proyecto de admisión, se pronuncie en el mismo sobre la obligatoriedad e inaplicabilidad al caso concreto de la Tesis XXXVIII/2016, así como el pronunciamiento respecto a los precedentes del Procedimiento Ordinario Sancionador, con número de expediente INE/CG-217/2019 y el Procedimiento Especial Sancionador, con número de expediente IEQROO/PESVPG/018/2022, este último instaurado ante este Instituto, en el que a su dicho, tácitamente se decretó la competencia del Instituto para conocer del procedimiento especial sancionador interpuesto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS APLICABLES A LOS HECHOS DENUNCIADOS

I. Con relación al asunto, la Constitución General, lo siguiente:

Artículo 116, fracción IV, inciso c), apartado 5º

Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

Artículo 108

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

Artículo 109

Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. ...

II. ...

III. **Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.**

IV. ...

...

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

...

Artículo 110

...

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

...

II. Por su parte, la Ley General, señala que:

Artículo 105

1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

2. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.

Artículo 117, numeral 1

1. Con independencia de lo que mandaten las Constituciones y leyes locales, serán **causas de responsabilidad de los magistrados electorales de las entidades federativas** las siguientes:

- a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;
- b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;
- c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;
- d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones correspondientes;
- e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;
- f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;
- g) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente Ley y de la demás legislación de la materia;

h) *Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y*

i) *Las demás que determinen las Constituciones Locales o las leyes que resulten aplicables.*

Artículo 118

1. Los magistrados electorales sólo podrán ser privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables.

III. Al respecto, la Sala Superior se ha pronunciado en la Tesis XXXVIII/2016, al tenor siguiente:

COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA CONDUCTA DE LOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL, CORRESPONDE A LA CÁMARA DE SENADORES.- De la interpretación de los artículos 116, fracción IV, inciso c), Apartado 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que la designación de los magistrados de los tribunales electorales locales se realiza por la Cámara de Senadores y en tales disposiciones no se estableció un sistema para la imposición de sanciones, por conductas cometidas en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral. Por ello, **compete a dicho órgano legislativo conocer de la conducta de los magistrados electorales locales, cuando incurran en el ejercicio indebido de la función jurisdiccional.**

(Lo resaltado es propio).

ESTUDIO DEL CASO

Precisado lo anterior, se procede a realizar un análisis exhaustivo de los hechos denunciados, así como lo que a derecho corresponda, a efecto, primeramente, de determinar si esta autoridad se encuentra debidamente facultada para sancionar posibles hechos que constituyan calumnia y violencia política en contra del denunciante, cometidos por una Magistrada del TEQROO, durante sesiones públicas del propio tribunal, a efecto de imponer en su caso, las sanciones correspondientes a la servidora pública denunciada, así como ordenar reparar los daños y perjuicios que ha sufrido el denunciante, y ordenar que se emita una disculpa pública en el mismo lugar y a través de los mismos medios en los cuales se realizó la supuesta conducta calumniosa, sanciones solicitadas por el denunciante.

Cabe señalar que en el apartado de hechos del escrito de queja, el denunciante señala que, durante el desarrollo de la sesión de Pleno de fecha siete de junio de dos mil veintidós, después de haberse leído por parte de la Ponencia del Magistrado Presidente el proyecto de resolución que proponía calificar como procedente su solicitud de excusa, en uso de la palabra la hoy denunciada Claudia Carrillo Gasca, emitió diversos comentarios que violentan su dignidad humana como servidor público, inobservando la obligación de respetar y garantizar el derecho de otros servidores públicos, asimismo, narra que la denunciada, solicitó se le excuse de participar de la votación de su solicitud de Excusa.

De igual forma, narra que, en esa propia fecha, durante la reanudación de la sesión pública de Pleno, la denunciada, nuevamente realizó manifestaciones en su contra, por lo que a su dicho, la conducta dolosa se vuelve reincidente en su perjuicio.

Por lo anterior, el denunciante considera que la denunciada, no solamente viola el procedimiento de trámite de las excusas establecido en la Ley, sino que de forma dolosa y en dos ocasiones diversas, a su criterio reincidencia, aprovecha que se encuentra en una sesión en vivo, que se transmite en tiempo real en las redes sociales oficiales del IEQROO, y que posterior a las sesiones se suben los videos a la página oficial del mismo para su acceso público, realiza señalamientos en contra de su persona, que son a su criterio, a todas luces violatorias de sus derechos fundamentales de inocencia por cosa juzgada, presunción de inocencia, así como de su derecho de respeto irrestricto a la honra y la dignidad humana. Hechos que señala, también son configurativos de violación a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y probidad que deben regir su desempeño como Magistrada Electoral.

En su escrito, el denunciante, también manifiesta que aún y cuando ha demostrado mediante sentencia su inocencia de los cargos que le imputa la denunciada, para la opinión pública es culpable de las conductas de las que fue acusado, siendo una de ellas la de violencia política contra la mujer en razón de género, por lo que, en su calidad de juzgador electoral, le causan un perjuicio grave el seguir siendo señalado como acusado y/o culpable de las conductas de las que ha probado su inocencia.

Asimismo, señala que, en el presente caso, las imputaciones que se le realizan, al ser un juzgador electoral, tienen un impacto directo en la certeza del proceso electoral, respecto de la integridad moral de las autoridades jurisdiccionales electorales que deben brindar certeza a la elección. Pues a su dicho, la denunciada se valió de su investidura como Magistrada Electoral, utilizando recursos públicos como son las redes sociales oficiales del IEQROO, durante el desarrollo de una sesión pública de Pleno, para denostarlo y calumniarlo con expresiones que la denunciada sabe que son falsas, pero que aun así, decide emitirlas con la finalidad de causarle un perjuicio a su persona y a su investidura como juzgador electoral.

De lo expresamente manifestado por el denunciante, se aduce, en su consideración, que la conducta denunciada, presuntamente fue cometida en el ejercicio de la función como Magistrada Electoral, esto durante comentarios vertidos en una sesión pública del IEQROO. Asimismo, el

propio denunciante, señala que las imputaciones que se le realizan por la denunciada, valiéndose de su investidura como Magistrada Electoral y utilizando recursos públicos como son las redes sociales oficiales del propio Tribunal, lo denotan y calumnian al ser un juzgador electoral y tienen un impacto directo en la certeza del proceso electoral, respecto de la integridad moral de las autoridades jurisdiccionales electorales que deben brindar certeza a la elección.

De esta forma, se concluye que el denunciante pretende que se sancione a la magistrada integrante del pleno del tribunal local, por hechos posibles de calumnia y violencia política dirigida a su también calidad de magistrado electoral; conducta que resulta para esta autoridad electoral local, fuera de su competencia por las razones y fundamentaciones siguientes:

En primera instancia, cabe citar el criterio determinado por la Sala Regional, en el expediente SX-JDC-6751/2022¹³, en donde ha señalado que derivado de la reforma político-electoral de dos mil catorce, se modificaron, entre otros, el artículo 116, fracción IV, inciso c), apartado 5º de la Constitución General, para establecer que la designación de las magistraturas de los Tribunales Electorales Locales, se realizaría por el Senado de la República. Asimismo, señalo que se expidió la Ley General la cual, en el Libro Tercero, Título Tercero, estableció la regulación de los órganos jurisdiccionales locales. Estableciéndose en su artículo 105, párrafo 2, que dichas magistraturas no estarán adscritas a los poderes judiciales de las entidades federativas y disponiendo una serie de reglas básicas tendentes a regular la designación de esas magistraturas por parte de la Cámara de Senadores, así como de su actuación, atribuciones, causas de responsabilidad de las magistraturas electorales de las entidades federativas y señalando que las magistraturas locales sólo podrán ser privadas de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de las personas del servicio público aplicables, lo cual encuentra sustento, entre otros, en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución general.

Asimismo, la Sala Regional determinó que ese marco normativo únicamente proporciona algunas bases que debe regir el funcionamiento de estos órganos, más no tiene un desarrollo particular en el tema que ahora le interesa al actor, respecto del procedimiento para la imposición de sanciones, en caso de una posible calumnia dirigida a un magistrado electoral y hechos de posible violencia política.

De esta forma, resulta aplicable el criterio establecido por la Sala Superior, en donde ha sostenido que, si la normatividad prevé que la designación de las magistraturas de los tribunales electorales locales se realiza por la Cámara de Senadores, entonces cuando se presente una denuncia u otro tipo de promoción con la intención de poner en conocimiento conductas posiblemente cometidas en el ejercicio indebido de la función jurisdiccional electoral, la competencia recae en dicho órgano legislativo, para conocer de la conducta de las citadas magistraturas.¹⁴

¹³ Disponible en https://www.te.gob.mx/EE/SX/2022/JDC/6751/SX_2022_JDC_6751-1163039.pdf

¹⁴ Tesis XXXVIII/2016, de rubro: COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA CONDUCTA DE LOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL, CORRESPONDE A LA CÁMARA DE SENADORES.

Siendo que de dicho criterio, la Sala Superior estimó que compete a la Cámara de Senadores conocer de la conducta de los magistrados electorales locales, cuando incurran en el ejercicio indebido de la función jurisdiccional. Ello, a partir de la interpretación de los artículos 116, fracción IV, inciso c), Apartado 5, de la Constitución General y; 105, párrafo 2, de la Ley General, de la que desprendió que la designación de los magistrados de los tribunales electorales locales se realiza por la Cámara de Senadores y en tales disposiciones no se estableció un sistema para la imposición de sanciones, por conductas cometidas en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral.

Aunado a lo anterior, la misma Constitución General, señala en sus artículos 108, 109 y 110, que para los efectos de las responsabilidades a que alude su Título, se reputarán como servidores públicos, entre otros, a los servidores públicos de los organismos a los que la propia Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Siendo sancionados conforme a lo que dispone su artículo 109, pudiendo formular la denuncia correspondiente ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto de las conductas referidas. Siendo el caso que, para la aplicación de las sanciones, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Siendo que aplicable al presente caso, el denunciado y denunciada, forman parte de una autoridad electoral jurisdiccional local, que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso c) apartado 5º y 105 de la Ley General, representa una autoridad jurisdiccional que resuelve las controversias en materia electoral, gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Por su parte, la Ley Local, establece en su artículo 203, que el Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, que gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Las magistradas y los magistrados electorales ejercerán sus funciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género. Asimismo, su artículo 210, señala que se compondrá de tres magistradas y magistrados, observando el principio de paridad, alternando el género mayoritario, que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, de conformidad con lo que establece la propia Constitución del Estado y que las magistraturas electorales serán electas por las dos terceras partes de las personas integrantes presentes de la Cámara de Senadores en los términos que establece la Ley General.

Por último, resulta de importancia tomar en cuenta el juicio de la Sala Superior, determinado en la Sentencia del expediente SUP-JDC-4370/2015¹⁵, en donde expone una situación de rispidez entre los integrantes del Pleno del Tribunal Local de San Luis Potosí, que tuvo impacto en el funcionamiento del órgano colegiado y refiere, generó que la actora haya sido objeto de conductas que tienen por objeto menoscabar sus derechos fundamentales. Señalando, que bajo esas circunstancias es importante tomar acciones oportunas a efecto de evitar la reiteración de ese tipo de conductas. Pues cita, que derivado de la reforma político-electoral de dos mil catorce se reformó, entre otros, el artículo 116, fracción IV, inciso c) apartado 5° de la Constitución General, para establecer que la designación de los magistrados de los Tribunales Electorales Locales se realizaría por el Senado de la República.

En concordancia con lo anterior, señaló que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual, en el Libro Tercero, Título Tercero estableció la regulación de los órganos jurisdiccionales locales. Asimismo, recalcó que, en el artículo 105, párrafo 2 de la norma en mención, se estableció que los citados órganos jurisdiccionales electorales, no estarían adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. Y de la misma forma, se establecieron una serie de disposiciones básicas tendentes a regular la actuación de los funcionarios judiciales; sin embargo, las mismas resultan insuficientes, pues no se establece con precisión cuál es el marco jurídico normativo que debe regir el funcionamiento de estos órganos, por lo que se hace necesario que las autoridades legislativas emitan las normas orgánicas necesarias que regulen el funcionamiento de estos órganos, la forma de organización, su estructura y las relacionadas entre sus integrantes y los funcionarios del propio órgano jurisdiccional, así como el procedimiento para la imposición de sanciones, en caso de violaciones a la normativa electoral. Lo anterior se señaló, a efecto de garantizar la certidumbre en el desarrollo de su actividad, así como los principios de imparcialidad, independencia y autonomía que deben regir la función judicial.

En consecuencia, en su Resolución determinó dar vista al Senado de la República para que en su carácter de órgano responsable de la designación de los magistrados involucrados, a efecto de que investigara y, en su caso, impusiera las sanciones que corresponda, por las conductas denunciadas.

En ese sentido, como el propio denunciante lo manifiesta, los hechos denunciados tienen un impacto directo en la certeza del proceso electoral, respecto de la integridad moral de las autoridades jurisdiccionales electorales que deben brindar certeza a la elección y deben ejercer

¹⁵ Disponible en <https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-4370-2015>

sus funciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad y perspectiva de género, por ello, como se establece en artículo 109 de la Constitución, los servidores públicos serán responsables por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, siendo la Cámara de Senadores, quien de conformidad con lo establecido en su artículo 110 y el criterio de la Sala Superior plasmado en la Tesis XXXVIII/2016, el órgano legislativo facultado para conocer la conducta de las magistraturas del presente asunto.

Sustenta lo anterior, como un criterio orientador, lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-JE-65/2022¹⁶, en donde se confirmó la resolución TEEH-RAP-PAN012/2022, aprobada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en la cual la controversia consistía en definir si la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Estado de Hidalgo y referido Tribunal Local, tenían competencia para investigar y sancionar a un Magistrado Electoral, al considerar la posible existencia de conductas, que violentaban el proceso electoral y el principio de neutralidad que deben observar las personas del servicio público.

Al respecto, determinó que el procedimiento especial sancionador no es la vía idónea para sujetar a escrutinio la actuación de una magistratura electoral, ya que no está diseñado como una vía para controlar su actuación y, por su parte encuentran su propio procedimiento de carácter sancionador, a cargo de otra autoridad.

Asimismo, señaló que, admitir la vía del procedimiento sancionador especial, podría repercutir en que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función, por parte de órganos ajenos al poder judicial o incluso por parte de aquellas magistraturas que ejercen funciones de revisión o apelación.

De igual forma, realizó una distinción respecto a los servidores públicos de los órganos autónomos como sujetos de responsabilidad contemplados en la legislación en materia electoral, en los casos en los cuales, en virtud de su alta responsabilidad, están sujetos a un régimen específico establecido a nivel constitucional. Sin embargo, resaltó la responsabilidad que encuentra una magistratura electoral local, en específico, en el estado de Hidalgo, al realizar un análisis del artículo 299, fracción VI y 306, fracción III, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, supuesto similar a lo que establece el artículo 394, fracción VI de la Ley Local.

En razón de ello, la Sala Superior compartió que, de la interpretación sistemática de la Constitución del Estado de Hidalgo, así como de su Código electoral local, no es posible considerar que cuando se hace referencia a servidores públicos de los órganos autónomos, como sujetos responsables sujetos a procedimientos sancionadores se pueda incluir a una magistratura electoral local. Dado que, si bien las magistraturas electorales locales son servidores públicos que pertenecen a un órgano autónomo, tiene una alta responsabilidad en el desempeño de su cargo,

¹⁶ Disponible en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0065-2022.pdf

atendiendo a los principios que rigen la función electoral y, por tanto, se encuentra sujetas a un régimen específico de responsabilidades.

De esta manera, determinó que, si la designación de las magistraturas de los tribunales electorales locales, se realiza por la Cámara de Senadores, consideró darle vista a efecto de que analice la posibilidad de implementar procedimientos, que hagan más efectivo el régimen de responsabilidad de dichos órganos jurisdiccionales, garantizando el debido proceso.

Además, sostuvo que en diversos precedentes ha evidenciado la insuficiencia en el sistema normativo que regula la organización y funcionamiento de los tribunales electorales locales, fundamentalmente, por lo que hace a la inexistencia expresa de un procedimiento mediante el cual se puedan imponer sanciones a dichos funcionarios por las irregularidades en que pudieran incurrir en el ejercicio de su cargo, que no necesariamente llevarían a la remoción.

En consecuencia, precisó que si la designación de las magistraturas de los tribunales electorales locales, se realiza por la Cámara de Senadores y de la normativa aplicable, no se estableció un procedimiento para conocer de las conductas cometidas en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral, por lo que, dicho órgano legislativo debe analizar la viabilidad, para establecer un procedimiento para conocer de la conducta de las citadas magistraturas, lo cual, requiere el establecimiento claro de un sistema para, en su caso, previo el respeto de las formalidades del procedimiento, imponer las sanciones que en Derecho correspondan. Ello, en sintonía con la reforma constitucional y legal en materia electoral de dos mil catorce, la cual encontró como una de sus finalidades el fortalecimiento de las autoridades jurisdiccionales electorales locales, para garantizar su independencia e imparcialidad, no solo a través del procedimiento de selección, sino también al dotarlos de determinados derechos en el ejercicio de la función jurisdiccional, para que ningún Poder de los Estados tenga injerencia en su funcionamiento.

De igual forma, en referido asunto, la Sala Superior encontró similitudes con la definición adoptada, con los expedientes SUP-REP-70/2022¹⁷ y SUP-AG-28/2021¹⁸, los cuales hacen alusión a procedimientos especiales sancionadores que pretendieron constituirse contra actos de consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral¹⁹.

En el primero de ellos, la propia Sala Superior determinó que fue jurídicamente correcto que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, desechara una denuncia en contra de un consejero nacional del INE, con motivo de diversas declaraciones de este último, en el marco de una sesión ordinaria de su Consejo General, toda vez que el procedimiento especial sancionador no es la vía adecuada para conocer de la posible responsabilidad de las y los consejeros electorales del Consejo General del INE.

¹⁷ Disponible en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0070-2022.pdf

¹⁸ Disponible en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-AG-0028-2021-Acuerdo1.pdf

¹⁹ En adelante INE.

En adición, otro precedente que sustenta y robustece como criterio orientador la presente Resolución, es lo determinado por la Sala Superior en el expediente SUP-AG-48/2021²⁰, en donde se resolvió que el INE carece de competencia para conocer de un procedimiento especial sancionador en contra de diversos consejeros y consejera de dicho Instituto, por la supuesta vulneración a los principios rectores de la función electoral con motivo del desempeño de su cargo, específicamente, al de equidad, neutralidad e imparcialidad, así como por el uso indebido de recursos públicos, al no estar diseñado como mecanismo de control del actuar de la y los servidores públicos citados como parte del árbitro electoral.

En el asunto, la Sala Superior precisó que las y los consejeros del INE si bien son servidores públicos, lo cierto es que son los encargados de la organización de las elecciones, bajo el ejercicio de los principios rectores como son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, el mandato de desempeñar su función con autonomía y probidad, así como ejercer la tutela del artículo 134 constitucional a través de dicho procedimiento especial sancionador. Sin embargo, resaltó que ello no equivale a que las y los Consejeros electorales nacionales estén exentos del cumplimiento de cualquier mandato constitucional o excluidos de responsabilidad, ya que todos los servidores públicos, incluso los pertenecientes al INE, están sometidos a la posibilidad de que se les exija responsabilidad respecto de las conductas que asuman en el desempeño de sus atribuciones, con motivo de posibles violaciones a los principios que rigen las funciones administrativas y, en su caso, electorales; sin embargo, de conformidad con el diseño constitucional y legal, el análisis de su posible responsabilidad como integrantes del máximo órgano de dirección del árbitro electoral, se realiza por diversas vías y órganos.

Pues determinó que, éstos junto con otros servidores públicos en cargos de alta responsabilidad están sujetos a un régimen específico, establecido a nivel constitucional, sujetando su régimen de responsabilidades, entre otros, lo establecido en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución general. Caso, que resulta compatible al presente, pues resulta de importancia señalar que, dichos consejeros electorales del INE, al igual que los magistrados electorales son electos por los miembros del Congreso de la Unión.

Otro precedente que robustece la decisión de esta autoridad, es lo determinado por la propia Sala Superior, dentro del expediente SUP-JE-107/2016²¹, en el cual, entre otros aspectos, resolvió la incompetencia del INE para sancionar a través del procedimiento ordinario sancionador las conductas presuntamente ilícitas atribuidas a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa o al magistrado presidente del Tribunal Electoral local, porque, como lo consideró la autoridad responsable, las conductas denunciadas no se encuentran dentro de aquéllas contempladas en la Ley General en materia electoral, como infracciones en los términos de su artículo 449.

²⁰ Disponible en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-AG-0048-2021-Acuerdo1.pdf

²¹ Disponible en https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JE-00107-2016#_ftn14

Adicionalmente, señaló que no implica que, de advertirse hechos que pueden constituir posibles conductas ilícitas de tales funcionarios, la autoridad administrativa electoral se encuentre imposibilitada para actuar, pues en ese caso estará en aptitud de dar vista a las autoridades competentes, para que sean éstas las que investiguen y sancionen tales conductas en lo particular.

Ello, considerando que, tratándose de magistrados electorales, el artículo 117, numeral 1, inciso a), de la LGIPE, dispone que “con independencia de lo que mandaten las Constituciones y leyes locales, serán causas de responsabilidad de los magistrados electorales de las entidades federativas, entre otras”, “realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros”; siendo que el artículo 118 dispone: “1. Los magistrados electorales sólo podrán ser privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables.”

En este sentido, confirmó el acuerdo impugnado en lo relativo a la falta de competencia del INE, a través de su Unidad Técnica de los Contencioso Electoral, para vincular al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral local y al Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa al procedimiento ordinario sancionador.

No obstante, indicó que ello no significa que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en ejercicio de sus funciones y en el desarrollo de su actividad, no esté facultada para dar vista a las autoridades competentes a efecto de que conozcan de los hechos denunciados para que se investiguen y, en su caso, se sigan los procedimientos de responsabilidad correspondientes. Lo anterior, con la finalidad de contar con una indagatoria exhaustiva que permita tomar decisiones más informadas respecto a los procedimientos a seguir, en caso de que sean distintos al ordinario sancionador electoral, o en relación con las autoridades a las que se deba dar vista por ser competentes para investigar y, en su caso, procesar y sancionar a los posibles responsables.

Ahora bien, en cuanto al escrito remitido por el quejoso, en fecha veinticinco de julio, en el cual entre otros aspectos, solicita que la Dirección como órgano encargado de la redacción del proyecto de resolución correspondiente, se pronuncie en el mismo sobre la obligatoriedad e inaplicabilidad al caso concreto de la Tesis XXXVIII/2016, y los precedentes del Procedimiento Ordinario Sancionador, con número de expediente INE/CG-217/2019 y el Procedimiento Especial Sancionador, con número de expediente IEQROO/PESVPG/018/2022, este último instaurado ante este Instituto, que a su dicho, tácitamente se decretó la competencia del Instituto para conocer del procedimiento especial sancionador interpuesto, al respecto se prevé lo siguiente:

En primera instancia, se precisa que el criterio contenido en la tesis XXXVIII/2016, adoptado en esta Resolución, si bien no tiene el carácter de obligatorio, es interpretado como un criterio jurídico que permite orientar la incompetencia de este Instituto, toda vez que, encuadra un supuesto de supuestas conductas de un caso análogo, cometidas en el ejercicio de la función

electoral por parte de una magistrada, mismas que ha propio dicho del denunciante, le causan un perjuicio grave a su calidad de juzgador electoral, al seguir siendo señalado como acusado y/o culpable de las conductas de las que a su dicho, ha probado su inocencia. En tal sentido, al ser un criterio orientador vigente y al denunciarse supuestas conductas en el ejercicio indebido de la función jurisdiccional por parte de una magistrada, se adopta el criterio multicitado, a efecto de que la Cámara de Senadores, tenga debido conocimiento del asunto, como instancia competente al efecto, al orientar el criterio jurídico que sirve de sustento a la presente Resolución.

En segunda instancia, respecto a los expedientes referidos con número INE/CG217/2019 e IEQROO/PESVPG/018/2022, se prevé que en el primero de ellos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, declaró su competencia para resolver conforme lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj); 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, por la presunta transgresión a la normatividad electoral derivado de la supuesta realización de acciones y omisiones por un grupo de funcionarios estatales, integrantes del Instituto Electoral local y representantes de partidos políticos, dirigidas a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de la quejosa, o de las prerrogativas inherentes al cargo público, que ostentaba como Consejera Electoral de este Instituto; conductas que a su juicio podrían constituir un presunto ejercicio de violencia política por razón de género. Además, se surtió la competencia, toda vez que en los juicios electorales SUP-JE-102/2016 y SUP-JE-107/2016, así como SUP-RAP-393/2018 y su acumulado, la Sala Superior determinó, entre otras cuestiones, que el Instituto Nacional Electoral debía hacer un examen integral y contextual de todo lo planteado en la denuncia primigenia, en función de la hipótesis sostenida en la acusación, desde una perspectiva de género, considerando, incluso, la necesidad de ordenar otras diligencias previas, relacionadas con todos los sujetos denunciados, asimismo determinó que se debía emplazar al procedimiento sancionador ordinario, además de los consejeros previamente emplazados, a los representantes de los partidos políticos y Directivos del Instituto precisados por la propia autoridad jurisdiccional. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se declaró obligado a acatar las resoluciones que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso, la concerniente al recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-393/2018 y su acumulado SUP-JE-63/2018.

En citado asunto, el Consejo General del INE, señaló que, *"Sin embargo, en concepto de esta autoridad, del contenido del audio en cuestión no es posible determinar que existe violencia política por razón de género en contra de la quejosa por parte de los sujetos denunciados en el presente procedimiento sancionador ordinario, sino que, en su caso, la conducta presuntamente infractora correspondería al Magistrado Electoral Víctor Venamir Vivas Vivas, respecto del cual esta autoridad carece de competencia para conocer de una presunta violación cometida por este, ello en términos de lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF en la resolución correspondiente al*

*SUP-JE-107/2016.*²² Expediente de la Sala Superior que ha sido analizado líneas arriba y con el cual de su observancia, el Consejo General del INE, determinó en su resolutive **QUINTO**, dar vista al Órgano Interno de Control del TEQROO, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda, respecto de la presunta conducta infractora por parte del Magistrado del Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo, Víctor Venamir Vivas Vivas, en los términos precisados en los considerandos Segundo, punto 7 y Tercero, inciso B) de su Resolución. Por lo tanto, el INE en el citado asunto determinó que no era competente para sancionar al magistrado.

Por último, respecto al expediente IEQROO/PESVPG/018/2022, que se trata de una queja en la cual una candidata a la gubernatura de Quintana Roo para Proceso Electoral Local 2021-2022, denunció al ciudadano hoy quejoso, en su calidad de Magistrado integrante del TEQROO, por presuntos actos mediante los cuales revictimizó a la entonces denunciante, en su calidad de candidata a la gubernatura del estado de Quintana Roo, al inobservar a sus criterios, la legislación aplicable y protocolos en materia de violencia política de género, con motivo del análisis y discusión del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente PES/034/2022, previa a su aprobación durante la sesión pública celebrada el dos de junio del presente año, hecho que además, a dicho de la denunciante vulneraba el principio de equidad en la contienda, en función de que dichas expresiones se difundieron en el periodo de veda electoral. En el caso de referencia, la Dirección con fundamento en lo establecido en los artículos 157, fracción X, 394, fracción VI, 394 Bis, inciso f) y 432 de la Ley Local, previó el encuadre de los sujetos y conductas denunciadas en materia de violencia política de género, por ello de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de Quejas, registró la queja con el número de expediente citado y realizó la sustanciación correspondiente.

Resulta de importancia señalar que, en el citado expediente en materia de Violencia Política de Género²³, tras la resolución correspondiente a cargo del TEQROO, recaída en el expediente PES/034/2022, en la cual se determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas, mismas que consistían en supuestos actos constitutivos de VPG y supuestas expresiones calumniosas en contra de la propia quejosa del expediente IEQROO/PESVPG/018/2022; la Dirección decretó el sobreseimiento, toda vez que consideró que el asunto quedó sin materia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69, inciso a), en relación al precepto 68, numeral 2, inciso a) del Reglamento de Quejas, ello, toda vez que la quejosa denunciaba supuestos actos mediante los cuales se le revictimizaba con motivo del análisis y discusión del procedimiento especial sancionador PES/034/2022. Determinación de la Dirección, que si bien fue impugnada por la quejosa a través del Recurso de Apelación, este fue desechado por el TEQROO, toda vez de su extemporaneidad.²⁴

²² INE/CG217/2019. Pág. 117. Disponible en

<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107580/CGex201904-10-rp-13.pdf>

²³ En adelante VPG.

²⁴ RAP/032/2022. Disponible en http://www.teqroo.org.mx/2018/Estrados/2022/Junio/resolucion/27_11.pdf

En el caso señalado, el Instituto, a través de la Dirección, atendió a los supuestos en materia de violencia política de género, contemplados constitucionalmente derivados de la reforma constitucional y legal del año 2020, en los cuales una candidata en el contexto de un proceso electoral local, aludió actos que a su dicho, menoscababan sus derechos políticos electorales, bajo su propia condición de candidata a la gubernatura por el estado de Quintana Roo, a partir de supuestas manifestaciones realizadas por el hoy quejoso, mismas que se previó guardaban vínculo en materia de violencia política de género. Bajo ese contexto, la Comisión, atendiendo la solicitud de la quejosa, bajo la apariencia del buen derecho, el temor fundado del peligro en la demora que conlleve a una afectación a la posible víctima y actuando con perspectiva de género, consideró que la expresión denunciada, podría constituir una inobservancia por parte del juzgador denunciado, al protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se ha señalado que, al impartir justicia se debe prestar atención, no sólo a las palabras y fórmulas que tengan un carácter sexista y/o se basen en estereotipos de género, sino también aquellas que resulten revictimizantes. En razón de ello, la Comisión, otorgó la medida cautelar bajo la figura de tutela preventiva, para la protección y garantía de derechos fundamentales, valores y principios reconocidos en la Constitución General y los tratados internacionales, con la prevención de su posible vulneración, en tanto se emitía la resolución de fondo respectiva. Situación que no aconteció, dado el sobreseimiento antes referido.

En lo particular del asunto de referencia, se considera que la naturaleza de los hechos que fueron denunciados son distintos a los que se denuncian en el presente caso, dado que la conducta denunciada y los sujetos se encuentran claramente previstos en la Ley Local, en términos de sus artículos 3, fracción XXI, 157, fracción X, 394, fracción VI, 400, fracción VII y 432, en correlación con el artículo 99 del Reglamento de Quejas, existiendo una vía específica contemplada, a diferencia del asunto que atiende la presente Resolución, en donde ambas partes ostentan la calidad de magistrados electores y se denuncian actos presuntamente cometidos en ejercicio de la función jurisdiccional.

En suma, se estima que lo alegado por el quejoso y a partir de lo razonado en el presente caso, esta autoridad no prevé que los sujetos y conductas denunciadas, mismas que resulta de importancia resaltar que presuntamente se realizaron en ejercicio de la función jurisdiccional, estén contempladas en la Ley Local, como materia de conocimiento del Instituto en la vía de procedimiento ordinario sancionador y por lo tanto, sean de su competencia.

Por lo anterior expuesto, se declara la incompetencia de este Instituto, toda vez que se actualiza la fracción IV del artículo 418 de la Ley Local, en consecuencia, se desecha el asunto por improcedencia en términos del artículo 420 de la citada Ley.

En consecuencia, por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Conforme a lo razonado en la presente Resolución, se determina la **incompetencia** del Instituto para conocer de los hechos denunciados.

SEGUNDO. Se ordena dar vista al Senado de la República, remitiendo copia certificada del escrito de queja de mérito.

TERCERO. Se ordena dar vista al Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de Quintana Roo, remitiendo copia certificada del escrito de queja de mérito.

CUARTO. Notifíquese por oficio la presente Resolución, al Senado de la República, para los efectos legales correspondientes.

QUINTO. Notifíquese por oficio la presente Resolución, al Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de Quintana Roo, para los efectos legales correspondientes.

SEXTO. Notifíquese por oficio la presente Resolución, al ciudadano Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en su calidad de denunciante, para los efectos legales correspondientes.

SEPTIMO. Notifíquese la presente Resolución, mediante oficio por correo electrónico, a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al Titular del Órgano Interno de Control, todos del Instituto.

OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución, mediante oficio, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral.

NOVENO. Publíquese y difúndase la presente Resolución, en los estrados y en la página oficial del Instituto.

DECIMO. Archívese, en su oportunidad, el expediente que se resuelve como asunto total y definitivamente concluido.

DECIMO PRIMERO. Cúmplase lo resuelto.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina; el Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, el Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz, y las Consejeras Electorales Claudia Ávila Graham, Maisie Lorena Contreras Briceño y María Salomé Medina Montaño. Con la excusa de voto de la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica. Todas y todos del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión ordinaria celebrada el día veintidós del mes de septiembre del año dos mil veintidós en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo.



MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA
CONSEJERA PRESIDENTA



MTRA. DEYDRE CAROLINA ANGUIANO VILLANUEVA
SECRETARIA EJECUTIVA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEQROO/POS/011/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA SX-JE-116/2022, DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL.